

C.A. de Rancagua

Rancagua, veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 28 de noviembre del año 2023, comparece doña **Lorena Alejandra Barros Pedraza**, chilena, profesora de historia, cédula de identidad N°17.511.149-2, domiciliada para estos efectos en Arturo Prat número 821, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, y viene en deducir recurso de protección en contra de **Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes**, R.U.T 81.826.800-9, representada legalmente por don Nelson Mauricio Rojas Mena, desconoce profesión u oficio, con domicilio en Calle General Calderón N° 121, piso 14, comuna de Providencia, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Señala que con fecha 4 de enero del año en curso, solicitó un crédito de dinero a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por la suma de \$7.362.281 por concepto de capital, más los intereses correspondientes, pagaderos en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas por un valor de \$210.180 pesos cada una.

Agrega que en razón de lo anteriormente señalado la recurrida la demandó ejecutivamente, específicamente el 15 de noviembre de 2023, en causa C-1883-2023, tramitada ante el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, libelo que se funda en el pagaré N°026CON103426256, por la suma de \$7.362.281.

Hace presente que, al revisar su liquidación correspondiente al mes de noviembre de 2023, se percató que esta era considerablemente inferior. Al analizar el detalle de la misma, constata que existía un descuento a favor de La Caja de Compensación Los Andes, por la suma total de \$221.078.-

Plantea que el descuento realizado por C.C.A.F., Los Andes, es un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en su derecho de propiedad sobre la remuneración que le corresponde percibir, pues jamás fue informada por algún medio respecto de dicha decisión unilateral, de realizar descuentos sobre sus remuneraciones entendiendo que ya se había judicializado el cobro del pagaré previamente individualizado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECEGXMSRSWM

Asegura que ha existido una clara intención de parte de la recurrida por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro, del ámbito extrajudicial que ahora pretende, por medio de los descuentos que ha realizado, en la planilla de su remuneración por su actual empleador.

Finalmente señala que la recurrida actuó de manera injustificada y arbitraria, realizando un descuento, que si bien la ley autoriza conforme el artículo 22 de la Ley 18.833, pero es un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno, de manera que el recurrente ya manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, generando así el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, demandando ejecutivamente el cobro forzado de las obligaciones como se indicó, causa que aún no concluye con la dictación de una sentencia.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección acogerlo y, en definitiva, lo acoja adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando:

a) Que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debe desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre su remuneración mensual.

b) La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, y que motiva el presente recurso.

c) Condenar en costas a la recurrida.

Por su parte y con fecha 30 de diciembre del año 2023, comparece la recurrida y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que con fecha 4 de enero 2023, otorgó a la recurrente la operación de crédito código N° 026CON103426251, por la suma de \$7.362.261.-, a una tasa de 1.83%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de \$210.280., cuyo primer vencimiento fue el 31.03.2023. Las cuotas del mes de marzo, abril y mayo de 2023 (1 a 3), se pagaron con fecha 31.03.2023, 28.04.2023 y 31.05.2023. Finalmente, con fecha 05.12.2023, se recibió la suma de \$ 221.078.-, cuyo monto se contabilizo como pagada la cuota del mes de junio de 2023 (4), más un interés penal de \$10.898. Las cuotas del mes de julio a octubre de 2023 (5 a 8), se encuentran en mora.



Agrega que si bien es cierto se ingresó una demanda a tramitación esta no ha sido notificada, por lo tanto no se ha trabado la Litis, en consecuencia en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Argumenta que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga, así y en esta línea de razonamiento, el hecho que haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera ni a su empleador, de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, afirma que el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento

Concluye que esta sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado



la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que la recurrente dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, atribuyéndole a ésta, como acto ilegal y arbitrario, el haber ordenado el descuento de cuotas de un crédito social de su remuneración en el mes de noviembre de 2023, en pago de cuotas atrasadas de un mutuo contratado por ella con la Caja en el mes de enero del año 2023, obligación respecto de la cual se presentó demanda de cobro ejecutivo ante el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua.

TERCERO: Que en su informe la recurrida reconoció haber efectuado el descuento cuestionado por la recurrente, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

CUARTO: Que de los antecedentes y de la revisión virtual de la causa Rol C-1883-2023, tramitada ante el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, se desprende que la recurrida, con fecha 15 de noviembre de 2023, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del saldo insoluto de la deuda en dichos autos, oportunidad en la cual ejerció su derecho de acelerar la deuda, optando por el cobro total de su crédito, por lo que no cabe si no concluir que han desaparecido las cuotas originalmente pactadas, mismas que ahora pretende hacer efectivas, contraviniendo sus propios



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECEGXMSRSWM

actos, usando así indebidamente el procedimiento especialísimo y de excepción contenido en la Ley N° 18.833.

QUINTO: Que, en tal orden de ideas, es posible concluir que el acto cuestionado resulta arbitrario e injustificado, al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, toda vez que en la especie resultaba improcedente, considerando la acción ejecutiva iniciada por la recurrida para cobrar el crédito discutido a través de esta acción.

SEXTO: Que, por todo lo anterior, dado que la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida ha afectado el derecho de propiedad de la recurrente respecto de sus remuneraciones sobre las cuales recaen los descuentos indebidos, corresponde acoger el recurso de protección para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se acoge** el recurso de protección interpuesto por doña Lorena Alejandra Barros Pedraza, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenándose a esta última cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración de la recurrente, y efectuar la restitución del dinero que eventualmente se hubiere descontado con posterioridad a la notificación de la demanda ejecutiva iniciada en su contra, dentro de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 3412-2023 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECEGXMSRSWM



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECEGXMSRSWM

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Marcela De Orue R., Jorge Fernandez S. y Abogada Integrante Ximena Isabel Carmona T. Rancagua, veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECEGXMSRSWM